

No más amenazas contra Chan Chan

Increíble, pero cierto! Ahora resulta que una empresa minera ha solicitado al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico una autorización para explorar y explotar hierro en la zona de amortiguamiento de Chan Chan, un pedido insólito e inconcebible que debe ser rechazado de plano.

El Instituto Nacional de Cultura (INC) ha hecho bien en reaccionar a tiempo y garantizar que de ninguna manera aprobará un proyecto que constituye una clara transgresión a la Ley de Patrimonio Cultural vigente, aun cuando se disfrace bajo el argumento de que los lotes mineros se ubican fuera de la ciudadela y sobre las tierras que rodean el santuario prehispánico.

No es la primera vez que la ciudadela es avasallada. Además de saqueos infames, fue en su momento invadida por traficantes de tierras a pesar de que se trata de un bien invaluable que ostenta el título concedido por Unesco de Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocimiento que solo pueden exhibir pocos monumentos del mundo.

Pero el pedido actual es tan risible, incoherente e insultante, que la propia empresa interesada en la extracción de hierro ha tenido que reconocer que no sabía que su pedido abarcaba una

zona histórica.

Habría que decir, además, que su solicitud va en contra de todas las iniciativas orientadas a revalorar Chan Chan en los últimos tiempos, con el objetivo de consolidarlo como uno de los atractivos principales del turismo trujillano y nacional.

Cada atentado contra Chan Chan y nuestro patrimonio hiere la peruanidad y es como matar la gallina de los huevos de oro que atrae el turismo

Hace apenas cinco meses, el Consejo Regional de La Libertad declaró en emergencia la ciudadela de Chan Chan debido a los daños que las lluvias causaron en sus estructuras. Y, recientemente, las autoridades departamentales anunciaron la aplicación de una serie de medidas de precaución para proteger el complejo de adobe de las inclemencias del clima y de un eventual fenómeno de El Niño en el 2010.

Debe quedar claro que, como hemos señalado reiteradamente, toda inversión es bienvenida al Perú. La inyección de capita-

les no solo permite el desarrollo de la infraestructura que el país necesita y la generación de divisas, sino que favorece el empleo con nuevos puestos de trabajo para miles de peruanos.

Sin embargo, tampoco se puede permitir ni alentar la agresión contra el patrimonio monumental que de manera cíclica pretenden sorprendernos. Cada atentado contra esos bienes históricos no solo afecta la peruanidad sino que es como matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, la riqueza que nos diferencia como país y revaloriza nuestra actividad turística.

Esta política no se opone a la inversión. Porque si bien tenemos muchos bienes culturales que aún no podemos poner en valor, sería un error no cautelar aquellos que con mucho esfuerzo están siendo recuperados.

Lamentablemente, como reconoce el propio INC, tales principios no se respetan y frecuentemente tenemos que reportar la destrucción de numerosos bienes o espacios patrimoniales. La responsabilidad recae en los gobiernos locales y regionales, encargados de conciliar criterios para minimizar el impacto de iniciativas descabelladas como la que se ha pretendido montar estos días en Chan Chan. ■■

PIEDRA DE TOQUE

Victoria pírrica

Mario Vargas Llosa
Escritor



© Mario Vargas Llosa, 2009.
© Diario "El País", SL/ Mario Vargas Llosa. Prisa.com.
Exclusivo para el diario El Comercio en el Perú.

La semana pasada el Congreso peruano derogó los decretos legislativos que habían provocado una revuelta indígena de grandes proporciones en la Amazonía: bloqueo de carreteras, toma de empresas, paralizaciones y acciones armadas en las que perecieron 24 policías (degollados, alanceados y quemados) y diez civiles (abaleados) y unas 150 personas resultaron heridas, según cifras verificadas por la Defensoría del Pueblo. La víspera, desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Alan García Pérez, promotor de aquellos decretos, había hecho su autocrítica, lamentando no haberlos consultado previamente con las comunidades indígenas y explicando que este repliegue del Gobierno se hacía en aras de la paz y para poner fin al derramamiento de sangre.

De este modo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), a la que están afiliadas unas 1.300 comunidades nativas y su dirigente Alberto Pizango (ahora asilado en Nicaragua), que lideraron el movimiento rebelde, obtienen un triunfo indiscutible. Aunque, para guardar las formas, la abolición de los decretos ha venido acompañada de una vaga propuesta de instalar una mesa de negociaciones para, en adelante, armonizar ideas entre autoridades y nativos, todos sabemos que ni este ni probablemente futuros gobiernos osarán en el Perú volver a intentar meter la mano en la Amazonía para alentar la inversión privada y el desarrollo económico de esta región, la más pobre y despoblada del Perú, que representa unos dos tercios de la geografía nacional. Una cosa está, pues, totalmente garantizada: los 332 mil nativos amazónicos, que, según el censo del 2007, distribuidos en unos quince grupos etnolingüísticos, hablan cerca de 70 dialectos, seguirán siendo en los años venideros los ciudadanos más desamparados y explotados del Perú, los que reciben la peor educación, tienen menos oportunidades de trabajo y las peores expectativas de salud y de vida de todo el país. Si esto no es una victoria pírrica, ¿qué es?

A pesar de su lenguaje algo difuso, los satanizados decretos estaban en el fondo bastante bien orientados. Persegüían una necesidad imperiosa: atraer in-



ILUSTRACIÓN VÍCTOR AGUILAR

“El Perú es una de las dos espinas que tiene clavadas en la garganta el caudillo venezolano. La otra, Colombia. Para sus sueños megalómanos de convertirse en el nuevo Bolívar”

“Desde el siglo XIX los indígenas de la selva han sido maltratados de manera inicua, expulsados de sus tierras por mercaderes esclavistas, diezmados en las caucherías”

versión privada y tecnología de punta hacia una región que tiene grandes reservas de gas, petróleo y muchos minerales y podría ser una fuente de prosperidad y modernización para ese país pobre que es el Perú, empezando, claro está, por quienes más ayuda necesitan: las comunidades nativas de la Amazonía. Es falso de toda falsedad, para cualquiera que eche una simple ojeada a los decretos en cuestión, que en ellos se pretendiera desconocer el derecho de propiedad de los nativos a sus tierras ancestrales. Al revés: su propósito, explícito e implícito, era demarcar estas

circunscripciones a fin de que su legalización fuera efectiva y no, como hasta ahora, una mera abstracción contradicha a diario por las invasiones múltiples de esas tierras son víctimas por parte de los narcotraficantes, la deforestación salvaje que va convirtiendo sus selvas en desierto, la minería ilegal y la enloquecida contaminación de ríos y lagos que está aniquilando la fauna y la flora amazónicas.

Es verdad que el Gobierno, antes de enviar al Parlamento estos decretos, debió llevar a cabo una campaña intensa de información y diálogos con las comunidades

nativas. No es seguro que hubiera sido más eficaz que los demagogos y extremistas que, desde hace tiempo, con el apoyo desembozado de Evo Morales y Hugo Chávez, vienen intoxicando a toda la región amazónica con una prédica revolucionaria cuyos soportes básicos son el anticapitalismo, el nacionalismo y el racismo. Es decir, el rechazo de la empresa privada y de la inversión extranjera –salvo, claro está, si ella es venezolana, cubana o iraní– a la vez que el reconocimiento de “naciones indígenas” que tendrían el derecho exclusivo a las tierras amazónicas. Pero, intentando

aquel diálogo, al menos se habrían evitado los muertos y heridos, y los grandes daños materiales que esto ha causado al Perú. Y el Gobierno se hubiera ahorrado una derrota política que los enemigos de la democracia –una minoría de resentidos y nostálgicos de Stalin, Mao Tse Tung y Sendero Luminoso– van a interpretar ahora como un incentivo para nuevas acciones violentas que acaben con el dinámico ritmo de crecimiento que tiene el país, lo arruinen y de este modo lo acerquen más a la órbita chavista de la revolución bolivariana y al “modelo” cubano.

Conozco bien la Amazonía peruana, donde he estado muchas veces y donde suceden tres de mis novelas, y he visto de cerca las terribles condiciones de vida de sus comunidades nativas. Desde el siglo XIX, cuando el apogeo del caucho, los indígenas de la selva han sido maltratados de manera inicua, expulsados de sus tierras por mercaderes esclavistas, diezmados en las caucherías, y, más tarde, brutalizados por aventureros sin escrúpulos que buscaban oro y otros metales, por los narcos, por los guerrilleros y por las fuerzas del orden, y siempre olvidados por los gobiernos de la República, ninguno de los cuales se preocupó jamás de la suerte de esta minoría que representaba muy poco desde el punto de vista electoral. Por eso, entre todas las regiones del Perú, ninguna como la Amazonía requiere con más urgencia que la anarquía y la “ley de la selva” que allí imperan sean reemplazadas por un orden legal justo y estable que garantice a las comunidades nativas sus derechos y les abra las oportunidades de mejora y progreso que solo el desarrollo económico –es decir la multiplicación de empresas privadas e inversiones nacionales y extranjeras– y la legalidad democrática pueden conseguir. En las regiones del Perú donde ello ha ocurrido, como en Lima y en toda la región del litoral y en muchos lugares de la sierra norteña, el progreso en estos últimos años ha sido espectacular, ha reducido los niveles de pobreza, generado altísimas tasas de empleo y, gracias al canon minero, dotado a las provincias de unas rentas que jamás tuvieron en el pasado. A esto acaban de renunciar de manera suicida las comunidades amazónicas que siguieron las consignas retrógradas de Alberto Pizango.

No solo él debe estar frotándose las manos ahora, en su exilio nicaragüense. También Fidel Castro y el gran triunfador de esta operación que es, por supuesto, el comandante Hugo Chávez. El Perú es una de las dos espinas que tiene clavadas en la gargan-

ta el caudillo venezolano. La otra, Colombia. Para sus sueños megalómanos de convertirse en el nuevo Bolívar, en América del Sur tiene ya secuestrada a Bolivia, semisecuestrado a Ecuador, neutralizada a Argentina que, de todas maneras, en la olla podría en que han convertido a ese antiguo gran país los esposos Kirchner, podría seguir descomponiéndose hasta caer atada de pies y manos en sus brazos. Brasil es demasiado grande y lejano para poder tragárselo, pero el astuto Lula, que tiene su propio proyecto –años luz del Chávez– nunca le hará sombra, ni se le enfrentará, mientras pueda sacar provecho de los petrodólares venezolanos que el hombre fuerte de Caracas derrocha a discreción. Chile ya despegó, ya casi no es un país del tercer mundo, de manera que a lo más que podría aspirar Chávez es a ayudar a desestabilizarlo. El Perú y Colombia, en cambio, son dos objetivos que todavía podrían caer en sus redes. Por eso, el caudillo venezolano ayuda a las FARC colombianas y a las bandas ultrarrevolucionarias (mezcla de narcos y terroristas) que operan en la región peruana del Apurímac y del Ene, y patrocina generosamente a las fuerzas políticas de extrema izquierda que en ambos países tratan por todos los medios, legales o ilegales, de atascar el modelo –democracia política y economía de mercado– que, en los últimos años, a Colombia, y sobre todo al Perú, ha traído un progreso sin precedentes.

Este es el contexto en el que hay que situar lo ocurrido en la Amazonía peruana para entenderlo cabalmente. La responsabilidad de quienes, de manera tan insensata como demagógica, han utilizado a las comunidades indígenas movilizándolas en una guerra abierta contra unas medidas de las que hubieran sido las primeras beneficiarias, inculcándoles las estúpidas mentiras según las cuales aquellos decretos formaban parte del tratado de libre comercio firmado entre el Perú y Estados Unidos y querían privarlos de sus tierras (que nunca han tenido de verdad) es enorme. Por lo menos ha quedado demostrado, una vez más, que no hay límite moral ni político que los enemigos de la libertad no estén dispuestos a transgredir. Y, también, que las reformas que emprenda un gobierno democrático, por más beneficiosas que sean, deben alcanzar un consenso popular antes de ser emprendidas, para que, como ha ocurrido en este caso, no resulten contraproducentes y terminen agravando los problemas que querían resolver. ■■